

Medellín, once (11) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

| | |
|----------------|---|
| Proceso | EJECUTIVO SINGULAR |
| Radicado | 05001 31 03 012 2016 00731 01 |
| Ejecutante | FONDO NACIONAL DE GARANTIAS |
| Ejecutado | ESTRUFORMAS S.A.S EN LIQUIDACIÓN ÁLVARO DE JESÚS PUERTA MONTOYA ESTEBAN PUERTA JARAMILLO |
| Juzgado Origen | SEGUNDO CIVIL CIRCUITO EJECUCIÓN SENTENCIAS MEDELLÍN |

Decide la Sala la apelación interpuesta frente al auto del 7 de diciembre de 2023, mediante el cual se declaró la terminación del proceso de la referencia por desistimiento tácito.

1. ANTECEDENTES.

El 7 de diciembre de 2023 el Juzgado Segundo de Ejecución Civil del Circuito de Medellín, declaró la terminación del proceso por desistimiento tácito, bajo la premisa de que el proceso permaneció inactivo desde el 3 de diciembre de 2021, sin que el ejecutante desplegara actuación alguna.

2. LA IMPUGNACIÓN.

Oportunamente, el apoderado de la parte demandante interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación contra el auto que finalizó el proceso.

Argumentó que la decisión es errada por haber acudido a una interpretación exegética de la norma, desconociendo lo que al respecto resolvió la Corte Constitucional en la sentencia C-533 de 2016, en el sentido de que tal consecuencia amerita un análisis subjetivo, a lo que agregó una referencia a un pronunciamiento de Sala Unitaria de este mismo Tribunal en el que se consideró que dicho precepto contraría la Constitución en cuanto al acceso a la administración de justicia y debido proceso.

Mediante auto 25 de enero de 2024 se mantuvo incólume la providencia recurrida y se concedió el recurso de alzada. El *a quo* consideró que la determinación de decretar el desistimiento tácito se hizo conforme a lo previsto en la norma y, en tal sentido, para impedir la terminación anormal del proceso los interesados debieron impulsarlo dentro de los dos años siguientes a la última actuación con

“Al servicio de la justicia y de la paz social”

actos trascendentes y tendientes a poner en marcha el proceso, pero durante dicho lapso no aportaron memorial alguno con esa finalidad.

3. CONSIDERACIONES.

3.1 COMPETENCIA.

Por disposición del artículo 321 del CGP, el recurso de apelación contra autos procede únicamente contra aquellos que la misma norma relaciona de manera taxativa o en aquellos casos contemplados en disposiciones especiales, como en el caso bajo estudio, donde se contempla el recurso de apelación en el literal e) del numeral 2 del artículo 317.

Para resolver, dispone el artículo 328 de la misma obra que, salvo decisiones que se deban adoptar de oficio, el superior debe limitar su análisis a las razones de inconformidad expuestas por el recurrente.

3.2 PROBLEMA JURÍDICO.

Le corresponde a la Sala determinar, si en el proceso de la referencia, en el que se había dictado auto de seguir adelante con la ejecución, era procedente la terminación del proceso por desistimiento tácito.

3.3 FUNDAMENTOS JURÍDICOS.

El Código General del Proceso consagra, entre varias hipótesis, la facultad para que, en procura de la continuidad del trámite del proceso, el juez declare desistida tácitamente la actuación y termine el proceso:

“ARTÍCULO 317. DESISTIMIENTO TÁCITO. El desistimiento tácito se aplicará en los siguientes eventos:

1. Cuando para continuar el trámite de la demanda, del llamamiento en garantía, de un incidente o de cualquiera otra actuación promovida a instancia de parte, se requiera el cumplimiento de una carga procesal o de un acto de la parte que haya formulado aquella o promovido estos, el juez le ordenará cumplirlo dentro de los treinta (30) días siguientes mediante providencia que se notificará por estado.

...

2. Cuando un proceso o actuación de cualquier naturaleza, en cualquiera de sus etapas, permanezca inactivo en la

“Al servicio de la justicia y de la paz social”

secretaría del despacho, porque no se solicita o realiza ninguna actuación durante el plazo de un (1) año en primera o única instancia, contados desde el día siguiente a la última notificación o desde la última diligencia o actuación, a petición de parte o de oficio, se decretará la terminación por desistimiento tácito sin necesidad de requerimiento previo. En este evento no habrá condena en costas o perjuicios a cargo de las partes.

El desistimiento tácito se registrará por las siguientes reglas:

...

b) Si el proceso cuenta con sentencia ejecutoriada a favor del demandante o auto que ordena seguir adelante la ejecución, el plazo previsto en este numeral será de dos (2) años;

c) Cualquier actuación, de oficio o a petición de parte, de cualquier naturaleza, interrumpirá los términos previstos en este artículo; ...”

La Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil, se pronunció respecto de esta causal y específicamente en cuanto a la suspensión del término y explicó que la expresión “*cualquier actuación*” no se debe interpretar en su literalidad, sino de manera sistemática y, por ello, la actuación desplegada para que interrumpa el término previsto en la norma es aquella que guarde relación con la carga requerida o que sea suficiente, idónea y apropiada para el impulso del trámite, así se le da sentido útil y eficaz a la directriz¹.

En el mismo sentido, la Corte ha precisado cuáles son las actuaciones que se consideran relevantes y dan lugar a la “*interrupción*” del término indicado en los procesos ejecutivos, cuando exista sentencia o auto que ordena seguir adelante con la ejecución:

“... se logra únicamente con actuaciones tendientes a la obtención del pago de la obligación o actos encaminados a lograr la cautela de bienes o derechos embargables del deudor, a fin de rematarlos y satisfacer el crédito perseguido.”²

Por otro lado, la doctrina ha ilustrado la diferencia existente entre las disposiciones de los numerales 1 y 2 del artículo 317 de Código General del Proceso. Así, en aplicación de su deber de dirigir el

¹ Ver STC11191 de 2020 Radicado 11001-22-03-000-01444-01 M.P. Octavio Augusto Tejeiro Duque.

² Ver STC1216 de 2022 radicado 08001-22-13-000-2021-00893-01 M.P. MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ.

“Al servicio de la justicia y de la paz social”

proceso y velar por su rápida solución e impedir dilaciones, el juez sin consideración del tiempo transcurrido requerirá a la parte para que cumpla con la carga procesal que le corresponde, so pena de declarar desistida la actuación. Mientras que, la segunda modalidad, es decir la contemplada en el numeral 2, es de aplicación en aquellos eventos en los cuales el proceso se encuentra paralizado en secretaría por más de un año, o dos años si cuenta con sentencia u orden de seguir adelante la ejecución, en cuyo caso, la autoridad judicial puede decretar, sin previo requerimiento, la terminación del proceso por desistimiento tácito, debiéndose constatar, tan solo la ausencia de actuación³.

La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia ha dicho que la aplicación de la hipótesis contenida en el literal b) del artículo 317 a los procesos que cuentan con sentencia o auto de seguir la ejecución, aun cuando opera de manera objetiva, el funcionario judicial deberá verificar no solo el vencimiento del término de los dos años, sino también a quién correspondía la carga de impulsar el proceso y un análisis de las causas de la parálisis⁴:

“3.- Así las cosas, la Sala confutada no tuvo en cuenta que: (i) Para decretar la terminación del juicio por «desistimiento tácito» debía contabilizar dos (2) años de inactividad - artículo 2, literal b), artículo 317 ídem-; (ii) El estancamiento debía ser de dos (2) años, sin interrupciones -artículo 2, literal c), artículo 317 ídem-; y (iii) Esclarecer si la inercia es de quien tiene la obligación de practicar determinado procedimiento. Valga resaltar que la sanción en comento no puede «decretarse» de manera irreflexiva, sino que es deber del funcionario a cargo de la causa emprender un análisis acucioso de la articulación en aras de constatar dichas vicisitudes de desidia”

Ha señalado la Alta Corporación que es jurídicamente viable la aplicación del desistimiento tácito a los procesos que cuenten con

³ Código general del proceso. Parte general, Hernan Fabio López Blanco: “... lo primero que observo frente a la norma en cita, es que contribuye a la regulación de destacadas consecuencias, prescribir que la paralización de un proceso en la secretaría del juzgado por lapso superior a un año, permite declarar de oficio o a petición de parte, la terminación del mismo por desistimiento, sin necesidad de que se cumpla ningún otro requisito adicional al de la constatación objetiva de que estuvo en secretaría ininterrumpidamente por dicho lapso, y, lo más importante, no es necesario buscar responsables de la paralización ni achacar la misma a incumplimiento del juez de su deber de adelantar el proceso, porque se admitió que en las actuales condiciones al juez le resulta físicamente imposible controlar todos los procesos en curso y tiene el demandante la carga de supervigilar su adelantamiento e impedir la parálisis del mismo.”

⁴ CSJ, Sentencia STC860 DE 2023. M.P. Hilda González Neira

“Al servicio de la justicia y de la paz social”

sentencia verificando previamente que el término de los dos años no haya sido interrumpido⁵:

Resáltese que a partir de la exegesis del numeral 2º, inciso 1º, del artículo 317 del estatuto adjetivo general, norma en la que, como se dijo, entiende esta Sala, se soportó el fallador accionado para adoptar su determinación, pues se trataba de un proceso con orden de seguir adelante la ejecución en firme, no hay asomo de duda que es jurídicamente viable decretar la terminación del proceso por inactividad...”

...

“Sobre el punto, es menester relieves que, si no había duda sobre el juicio objetivo consistente en encuadrar el asunto al supuesto normativo (literal b) del numeral 2 transuntado; lo que operaba luego era revisar si procedía declarar el desistimiento tácito por encontrar acreditada una inactividad de 2 años o si por el contrario, conforme al literal c), aquel término se encontraba interrumpido, lo que haría improcedente acceder a la pretensión elevada por la parte pasiva, y no establecer que la “fase procesal” a terminar era la subsiguiente a la sentencia, pues ninguna interpretación arroja en ese sentido”.

3.4 CASO EN CONCRETO.

Del examen del expediente, se constató que en el proceso bajo estudio se libró mandamiento de pago el 5 de septiembre de 2016⁶, el 14 del mismo mes y año se decretó el embargo de acciones, dineros en cuentas bancarias y el embargo y secuestro de un establecimiento de comercio⁷; que se emitió auto de seguir adelante la ejecución el 21 de julio de 2017, en el que se dispuso el remate de los bienes cautelados⁸ y por auto del 1 de agosto de 2017 se aprobó la liquidación de costas⁹; que el 12 de marzo de 2018 el Juzgado Segundo de Ejecución asumió el conocimiento del proceso ejecutivo¹⁰ y el 13 de septiembre de 2018 se presentó la última liquidación del crédito, modificada por auto del 8 de octubre de 2018¹¹ y; que el 26 de noviembre de 2021, se presentó memorial cediendo el crédito, lo cual fue resuelto negativamente por auto del 3 de diciembre de 2021, por ausencia de derecho de

5 STC12923—2017, Radicación . 011001—02—03—000—2017—02131—00 M.P. Ariel Salazar Ramirez.

6 Ver cuaderno C001Principal, documento 004MandamientoDePago.

7 ibidem, 006AutoQueDecretaMedida

8 01CuadernoPrincipal, documento 034AutoSentenciaSeguirAdelanteEjecucion

9 ibidem, documento 036AutoApruebaLiquidacion

10 Ibidem, documento 040Auto

11 Ibidem, 045LiquidacionDelCredito y 047AutoModificaLiquidacion

“Al servicio de la justicia y de la paz social”

postulación de quien lo pidió¹². Desde entonces, el proceso permaneció inactivo hasta el 7 de diciembre de 2023, cuando se profirió el auto cuestionado.

El apelante reprocha que el *a quo* haya decretado la terminación del proceso por desistimiento tácito, habiendo auto de seguir adelante con la ejecución e inferir que hubo desinterés de la parte para continuar con el trámite. Para el apelante, tal interpretación desconoce los derechos ciertos consolidados en la providencia ejecutiva y transgreden el debido proceso y acceso a la administración de justicia.

Conforme al precedente expuesto de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, para la aplicación del supuesto de hecho contenido en la norma aludida, es deber del funcionario judicial verificar que el término de los dos años no se encuentre interrumpido y quién es el sujeto procesal responsable de la parálisis del proceso, pues de tratarse de inactividad de la judicatura, mal podría decretarse el desistimiento.

Conforme con lo anterior, es claro que entre la providencia que resuelve desfavorablemente la cesión del crédito (3 de diciembre de 2021) y el auto que concluye el proceso por desistimiento tácito (7 de diciembre de 2023), transcurrieron dos años ininterrumpidos. Luego, adelantado hasta esa etapa el proceso, sin que existiesen actuaciones pendientes por parte del funcionario judicial, era carga del ejecutante impulsar su causa con actuaciones de idoneidad para continuar con la ejecución, tales como actualizar la liquidación del crédito o buscar la cautela de otros bienes del deudor, aparte de los embargados que pudiesen ser llevados a remate o, en su defecto, al menos hubiere podido insistir en la cesión del crédito subsanando la falencia por la cual fue denegada. Sin embargo, contrario a ello, dejó transcurrir el término de los dos años sin manifestación alguna.

Sumado a lo anterior, en el recurso el demandante en modo alguno demuestra que el interregno de los dos años haya sido interrumpido por alguna actuación suya que fuera de suficiente entidad para movilizar el proceso o por lo menos diera cuenta de las razones del abandono de seguir promoviendo la ejecución. Antes bien, muestra de la desidia se constata con la presentación de la intención de ceder el crédito a Central de Inversiones S.A., sin remediar el defecto que la truncó o seguir adelantando la ejecución.

¹²
ibidem, 053Memorial y 054Auto.

Contrario a ello, el demandante estimó que con posterioridad al auto de seguir adelante la ejecución es inaplicable el desistimiento tácito, porque desconoce los derechos de crédito, violando, además el debido proceso y el acceso a la administración de justicia. Sin embargo, tal interpretación, como se vio en precedencia, no es acorde con el precedente de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia pues la verificación de los presupuestos que conducen a la aplicación del literal b) del numeral 2 del artículo 317 no son solamente los objetivos de transcurso del tiempo e inactividad procesal, sino que incluso involucran un análisis subjetivo y reflexivo acerca de los motivos de tal inactividad, lo que sucede es que en este caso ni siquiera se ofreció una excusa susceptible de análisis por la falta de gestión.

Ahora bien, en la Sentencia C-531 de 2013¹³, que cita la demandante como fundamento del recurso, no hubo sentencia de mérito, la Corte se declaró inhibida para decidir por ineptitud sustancial de la demanda y consideró:

2.11. La interpretación de la norma demandada es injustificada porque ninguna de las hipótesis antedichas implica per se la extinción o afectación del derecho, sea que esté reconocido en la sentencia en firme o sea que esté incorporado a un título que preste mérito ejecutivo. Esta circunstancia es evidente, pues basta leer el literal f) del artículo 317 de la Ley 1564 de 2012 para constatarla. En efecto, este literal prevé que “el decreto del desistimiento tácito no impedirá que se presente nuevamente la demanda transcurridos seis (6) meses contados desde la ejecutoria de la providencia que así lo haya dispuesto o desde la notificación del auto de obediencia de lo resuelto por el superior, pero serán ineficaces todos los efectos que sobre la interrupción de la prescripción extintiva o la inoperancia de la caducidad (...)”.

2.12. Y es que de la circunstancia de que se decreta el desistimiento tácito no se sigue el titular del derecho reconocido por la sentencia judicial en firme o contenido en el título que preste mérito ejecutivo, no pueda volver a acudir ante la jurisdicción para hacerlo efectivo, por medio del proceso de ejecución. Lo que se afecta con el decreto del desistimiento tácito no es el derecho el comento, sino la

¹³ En la cual se demanda por inconstitucional el literal b) numeral segundo del artículo 317 de la Ley 1564 de 2012

*interrupción de la prescripción y la operancia de la
caducidad.*

Conforme con lo anterior, no se acoge la postura de la recurrente, por el contrario, las razones de la Corte para declararse inhibida explican precisamente que la norma del artículo 317 está bien construida, no evidencia vacíos ni contradicciones que ameriten una interpretación teleológica o incluso una eventual inaplicación por inconstitucionalidad.

La sanción procesal en comento no desconoce los derechos ciertos contenidos en el título ejecutivo, sino su ejecución a través del proceso inactivo que pierde vigencia. Tampoco contraría el principio de la cosa juzgada pues, por disposición del artículo 304 del CGP, algunas decisiones de fondo no la consolidan y en este caso ha sido la misma ley la que ha consagrado una causal de terminación anormal del proceso que no configura cosa juzgada ni impide la presentación del proceso luego de transcurridos seis meses a partir de su ejecutoria, la sanción definitiva solamente se prevé para el caso de un segundo desistimiento tácito y tiene una razón válida, en virtud del principio dispositivo que impera en materia civil, es carga del actor promover el proceso hasta su fin, sin dilaciones, pues la seguridad jurídica amerita firmeza en las relaciones sociales, no se considera válido sostener en incertidumbre un litigio al que se le ha perdido interés, ello soporta las consecuencias del desistimiento tácito.

Así las cosas, no está llamado a prosperar el recurso de alzada y se confirmará la providencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Unitaria de Decisión Civil,

4. RESUELVE.

PRIMERO: CONFIRMAR la providencia apelada, fechada del 7 de diciembre de 2023, dentro del proceso de la referencia.

SEGUNDO: ORDENAR la devolución del expediente al juzgado de origen, sin condena en costas.

NOTIFÍQUESE



SERGIO RAÚL CARDOSO GONZÁLEZ
Magistrado